

Comentario

Nils Castro

1

6

3

La democratización puede entenderse y cumplirse de diversas maneras y para distintos fines. En los años ochenta tuvimos importantes progresos en este campo, pero debemos evitar que se festine lo logrado sin examinar las limitaciones y distorsiones que se les han impuesto, y lo que falta por conquistar. Aunque parezca una verdad de Perogrullo, todavía necesitamos insistir en que las justas electorales –aunque sean honestas y se respeten– distan de agotar todos los contenidos de la democracia, y que no necesariamente garantizan lo requerido para alcanzarla.

Los planteamientos sobre elecciones en los países bolivarianos que aquí hemos conocido permiten verificar que es-



tamos asistiendo a procesos de democratización controlada —de democracia “res-tringida” o “viable” como se decía claramente hace pocos años—, y observar cómo los procesos y mecanismos electorales establecidos han permitido abrir una época mejor y evitar que resulte “demasiado” mejor.

Variando métodos, formas y ritmos de acuerdo con las distintas particularidades nacionales, históricas y políticas de cada país, se deja ver una constante: los procesos democratizadores parecen estar manejados y dosificados para hacerles arribar a determinados fines, no contestatarios o poco contestatarios. Al cabo, se mejora la convivencia social y la forma de dar gobierno al sistema, pero sin generar alternativas para transformarlo.

Ante la democratización debiera haber, al menos potencialmente, un plan del pueblo o de los sectores sociales que lo integran. En cambio, hay y se impone un plan de la potencia hegemónica y las oligarquías, de sus centros de poder —que no están sujetos a democratización. En estas circunstancias, la democracia se queda en un conjunto de mecanismos y ejercicios de legitimación y recambio electorales de administraciones civiles del gobierno, pero no de participación pluralista que transforme la realidad en interés nacional y popular, pese a que es “el pueblo” quien concurre a votar. Así, la democratización efectiva de las estructuras económicas, sociales y culturales —que nuestra realidad reclama a gritos— deja de emplazarse.

Vale encomiar y defender decididamente lo que a tan alto costo se obtuvo en los años ochenta. Se logró nada menos que dejar atrás la pesadilla de las dictaduras oligárquico-militares, reemplazadas por gobiernos civiles, fortalecer el respeto a los derechos huma-

nos y cívicos, y consagrar formas más civilizadas y humanas de convivencia. Pero también debe señalarse que todo esto se ha realizado con mecanismos que paralelamente garantizan la cooptación o la marginación de las corrientes y personalidades políticas potencialmente transformadoras del sistema establecido. En nombre de cierto pragmatismo, se tiende a “domesticar” a los partidos y candidatos durante el proceso de elección, o a deshacerse de ellos en las formas que caracterizan a cada país (ya sea vedándoles el acceso a la prensa o aseñándolos, por ejemplo).

En la práctica, estamos eligiendo, instalando y relevando “administraciones civiles de la deuda”, voluntaria o coactivamente maniatadas. Como se sabe, en el curso del pasado decenio la potencia hegemónica reestructuró las relaciones con su periferia neocolonial en este continente; ahora los postulados del neoliberalismo y los requerimientos fondomonetaristas imponen los reajustes estructurales que cada país debe negociar y asumir como objeto de esas nuevas relaciones. El acatamiento de tales reglas ha propiciado que la democratización se constriña a puntuales ejercicios electorales, limpios y preferiblemente supervisados por observadores foráneos (sobre todo si provienen de las potencias y organismos interesados en determinado resultado electoral). Con ello, se marginan las otras dimensiones de la democracia y se legitima la injerencia extranjera.

La democracia, en cualquiera de sus formas, exige elecciones y organismos políticos y candidaturas competitivos. Pero el sistema ahora establecido en casi todos nuestros países los limita de hecho a la competitividad “admitida”, que —por ventajas en los medios económicos, informativos y publicitarios— reduce las

1

6

4

oportunidades reales de los competidores que (con una u otras características político-ideológicas) garantizarán efectivamente la continuidad del funcionamiento y reproducción del sistema. Estos suelen ser los mejor dotados de recursos, asesorías y soportes extranjeros (abiertos o solapados) para realizar crecientemente costosas campañas electorales “a la americana”. Por lo demás, ello es consecuente con otra de las dimensiones de la crisis, la que se refiere a la pérdida de cuotas de soberanía y autodeterminación resultante de las políticas fondomonetaristas y las repetidas concesiones a que obligan las renegociaciones financieras.

En tal contexto, grandes partidos históricamente consolidados hoy se ven devastados por la crisis. Cada vez más, son violentados y superados por rivales de ocasión, carentes de base social organizada y consciente, virtualmente “fabricados” por potentes medios publicitarios. La población de menor desarrollo político se ve convertida en un protagonista electoral de mayor envergadura. Candidaturas exitosas, como las de Collor de Mello, el alcalde limeño Belmont o Vargas Llosa son artefactos electorales creados por la televisión desde el vacío político, donde el *show business* ocupa el lugar de los proyectos serios. Esto exige presupuestos y asesorías millonarios, trasladando las ventajas competitivas a las corporaciones empresariales sobre los partidos políticos.

Gran parte de las ponencias sobre elecciones latinoamericanas aquí debatidas también demuestran otro factor adicional: el de la manipulación de nuestros procesos electorales por la potencia hegemónica. El control y manejo de los medios de información, la desinformación y los métodos de guerra psicológica, la presión política y político-di-

plomática, la coacción económica y financiera, la corrupción de aparatos electorales, la destabilización de las alternativas indeseadas, la amenaza militar (con militares del propio país, con fuerzas irregulares, o con amago de intervención directa de fuerzas extranjeras); en resumen, el repertorio de recursos sistematizado en la “doctrina de conflicto de baja intensidad”. De esto son ilustrativos los casos de Panamá y Nicaragua, como posiblemente lo será el de Perú y, en su momento, el de Ecuador. O bien se dará la invasión pura y simple, cruenta y demoledora, como la efectuada en Panamá, que también sirvió para dejar amenazados a los demás países del subcontinente.

Tal es el marco acondicionador de una “democratización” neocolonizadora o una neocolonización “democrática”, reducida a su componente electoral, debidamente controlado. Conforme a circunstancias nacionales, el repertorio contempla desde medios sutiles y fácilmente legítimos—como en Venezuela o Brasil— hasta otros de carácter abiertamente brutal. Baste ver cómo estos procesos se ejecutan en Colombia, así como en Guatemala o El Salvador.

Naturalmente, Argentina es un caso único—como lo es cada uno de los demás—, pero es harto iluminador del fondo de la cuestión. La dictadura más siniestra sirvió al propósito de reestructurar brutalmente la economía y la sociedad, en consonancia con la mencionada reestructuración de las relaciones internacionales. Luego de cumplirse esa dolorosa transformación—destruida la industria nacional en favor del sector financiero y especulativo—, el gobierno volvió a administraciones civiles debidamente elegidas. No para recuperar un proyecto nacional independiente, sino para administrar apenas la estructura empobre-



cedora así establecida y sus relaciones de dependencia. Merecida, aunque blandamente, algunos "gorilas" fueron a la cárcel, pero no así los verdaderos mentores y beneficiarios de la reestructuración: la oligarquía y sus técnicos, quienes quedaron impunes y aun reintegrados al gobierno. Otro tanto sucedió en Chile, salvo que con la impunidad de los "gorilas".

En el trasfondo, el recurso de la fuerza no ha desaparecido del todo, sino cambiado. Cada vez que la inquietud popular asoma por efecto de las nuevas circunstancias sociales y económicas, resurge el argumento de que sus protestas podrán acarrear el retorno de los militares. De este pretexto se valió Febres Cordero para doblegar a los ecuatorianos ante el autoritarismo y entreguismo de su régimen. Así las cosas, ya ni hacen falta las bayonetas cuando basta evocar a su fantasma. Este chantaje, que promete que las cosas podrán ser aún peores, tiene el propósito de que los pueblos tengan que optar por el mal menor, es decir, soportar el mal establecido; a la democracia le toca justificar y administrar. Mientras se les escamotea así la oportunidad de elegir sus propias opciones, también se cumple el propósito de disculpar a las oligarquías ahora desmilitarizadas, que en el interin siguen compartiendo los beneficios de la situación con la potencia hegemónica y los acreedores extranjeros.

Otro recurso afín es imponer la postergación indefinida de los anhelos nacionales y objetivos programáticos. Se hace a los partidos y pueblos doblegarse ante la supuesta exigencia de "comprender" los requerimientos de la crisis económica y los organismos financieros, y las quiméricas "ventajas" de diferir sus metas políticas, haciendo concesiones "necesarias" para negociar financiamien-

tos y conservar "esta" democracia formal, limitada e insatisfactoria. Como en Panamá en 1984 y mayo de 1989, se induce a aceptar, o incluso buscar, las propuestas electorales y gubernamentales presumiblemente más aceptables para la derecha local y la hegemonía foránea, con la vana esperanza de que esto depare mejores condiciones de diálogo y renegociación para paliar, no transformar, la situación. Se difieren una y otra vez las opciones verdaderamente nacionales y reformadoras, optando *motu proprio* por las otras sin que tengan que venir fuerzas extranjeras a imponerlas. Luego, los "dineros frescos" no llegan, pero las frustraciones se acumulan.

O, lo que es peor, se promete en campaña electoral un programa destinado a rescatar la soberanía nacional y a acometer las transformaciones requeridas por las aspiraciones populares. Pero, como en Venezuela en 1989, apenas asumido el gobierno se usa la legitimidad transitoriamente ganada para realizar la política exactamente contraria. Cuando la población, defraudada y perjudicada, expresa su protesta, se ordena al ejército salir tres y cuatro veces a las calles, dando muerte a miles de ciudadanos por obra del poder civil honestamente alcanzado por sus votos.

Lo uno y lo otro conducen, más allá de la frustración, al descrédito del instrumento electoral, que puede traducirse en pérdida de confianza en la democracia más que en la conciencia de la necesidad de perfeccionarla, sobre todo si se ven cerradas las vías para mejorar sus instrumentos, ampliarla y profundizarla. El congelamiento del sistema establecido se refleja en varias deformaciones del instrumento electoral, una de las cuales es el abstencionismo, fenómeno particularmente notorio en Estados Unidos. Uno

de los casos más dramáticos es el colombiano, donde la violencia es parte constancial del sistema: se asesina a centenares de dirigentes y candidatos que amenacen trascender los límites hace mucho establecidos.

El abstencionismo refleja en distintos grados más de un fenómeno: indiferencia —muchas veces propiciada por el sistema para descartar a las opciones contestatarias—, pérdida de confianza, y protesta. Se hermana con otro efecto crecientemente peligroso, al que aquí Agustín Cueva acertadamente ha denominado “lumpenización” del sistema político-electoral. Ya sea el populismo desideologizado, machista y turbulento de los Febres y los Bucarán en la costa ecuatoriana, o el empleo implícitamente tolerado de delincuentes como fuerza irregular de represión y asesinato políticos en Colombia, Guatemala o Haití.

La lumpenización tiene, entre sus expresiones más graves, la fuerte presencia de los intereses del narcotráfico dentro del juego político-electoral, particularmente en Colombia, Bolivia y Perú —e incluso Costa Rica—, pero no sólo en estos países. La imposición del estilo “norteamericano” de campaña electoral desideologiza las luchas políticas y consume enormes financiamientos —publicidad televisiva y giras espectaculares, por ejemplo—, haciendo al sistema más y más permeable para el dinero y candidatos del narcotráfico. Esto genera grandes deformaciones que ponen en duda la legitimidad del instrumento electoral y de sus resultados.

Al mismo tiempo no deja de ser parte de esta lumpenización el creciente uso del narcotráfico y de su represión como pretextos para encubrir y justificar la injerencia y la manipulación extranjeras de los procesos político-electorales; esto va desde los métodos de guerra psico-

lógica, usados por las transnacionales noticiosas, los grandes medios de comunicación y las vocerías de la potencia hegemónica, hasta la imposición de programas de contrainsurgencia sobre los planes de represión al narcotráfico, la introducción de financiamientos con aplicaciones políticas, las injerencias policiales, e incluso el amago de intervención militar. Panamá transitó todos esos grados sin ser un país importante para los negocios del narcotráfico; varios de los mismos se aplican sobre Colombia, en tanto que Perú y Bolivia vienen adquiriendo su diversidad.

Cuando uno contempla los procedimientos electorales de este periodo como algo sujeto a unos u otros de los factores resumidos en los párrafos anteriores, no puede menos que preocuparse. La mera presencia de inmensos índices de abstención —como los de las recientes elecciones locales venezolanas— indica que grandes masas de ciudadanos se lavan las manos contemplando las elecciones como meros procedimientos administrativos mediante los cuales los grandes intereses establecidos se relevan entre sí, y en lo cual la voluntad política popular cada vez tiene menos que ver. Porque las elecciones han quedado instituidas como recurso para neutralizar los movimientos sociales reales o, en casos como el colombiano y el peruano, incluso como recurso contrainsurgente más que como oportunidad para la participación popular.

Ello se expresa en la proliferación y creciente peso de movimientos sociales organizados que operan fuera del sistema político-electoral establecido. Son reagrupamientos ciudadanos que ya no confían en el sistema ni en los organismos políticos que lo integran, sino que buscan por otras vías lo que éste les escamotea: en organizaciones gremiales,

laborales o vecinales, en agrupaciones ecologistas, cristianas, femeninas o juveniles, en movimientos por reivindicaciones específicas. Al contrario de lo que algunos dicen, estos agrupamientos también alcanzan contenidos ideológicos unitarios y muy desarrollados. En Chile, verbigracia, se diferencia entre la izquierda "social" y la izquierda "política", reconociendo la notable influencia independiente asumida por estos movimientos que generan su propio pensamiento, liderazgo y acción fuera de los que ofrecen los partidos. En Colombia y Perú se dan fenómenos similares, pero allí hay que agregar las organizaciones guerrilleras.

Otra cuestión aparte, que figura en todas las ponencias sobre democracia y elecciones en los países bolivarianos aquí discutidas, es la del ejército; resulta inevitable mencionarlo una y otra vez, pero nunca como sujeto de estudio. Quizá influye en esta omisión el negro recuerdo dejado por la pesadilla de las dictaduras oligárquico-militares. Sin embargo, no se pueden abordar los procesos democráticos sin considerar el tema con profundidad, con los instrumentos científicos adecuados y más allá de la literatura de denuncia, porque incide sobre el asunto que nos preocupa. Por ello haremos una breve disquisición al respecto.

Tradicionalmente, la potencia hegemónica ha manipulado a los militares latinoamericanos y la oligarquía persiste en cautivarlos, involucrarlos en sus intereses, y en conspirar con los generales cada vez que dichos intereses peligran. Sin embargo, hay una autonomía relativa de la institución militar. Hoy, la crisis y las políticas neocoloniales han dejado a nuestros países en tan mal estado que los militares eluden sus responsabilidades políticas, lo cual favorece

los avances democráticos sin que por ello queden resueltos los demás problemas. Pero el continuado agravamiento de la crisis y de sus efectos podrá desencuartelar a los soldados; hay referencias abundantes sobre las inquietudes que ya provoca entre los militares argentinos e incluso venezolanos, por ejemplo.

Gústenos o no, los sectores democráticos deben ser mejores estudiosos de la cuestión y retomar los cuarteles a la oligarquía para vincularlos a los intereses verdaderamente nacionales. La memoria de Cárdenas, de Arbenz, de Torrijos, de Camaño, de los marinos de Carúpano y Puerto Cabello, de Velasco, de Torres, de Grove, del tenientismo brasileño, de Seregni, debe recordarnos que eso es posible, como también recordarnos que es desacertado dejarlos solos, porque las mismas experiencias demuestran que los militares progresistas suelen extraviarse y fracasar cuando carecen de adecuada guía política o cuando centralizan demasiado el proceso democrático o nacional-liberador.

Como la historia de nuestros países lo enseña, la mera emisión de leyes no basta para mantener a los generales en los cuarteles ni garantizar los objetivos que buscamos. Por lo mismo, debe analizarse cada realidad particular, y toca a los sectores civiles democráticos y patrióticos estructurar políticas de relaciones con los militares encaminadas a dar profundidad a la democratización, y una política más coherente de relaciones entre el gobierno democrático y la institución militar, para que ésta pueda aplicarse a fines que interesen al desarrollo democrático y la liberación nacional, fuera del control oligárquico.

Pero volvamos, para resumir, al asunto principal de nuestros comentarios. Todo lo que antes habíamos señalado



conduce a concluir que la democratización —y los procedimientos electorales que necesariamente le corresponden— tiene nombres y apellidos. Obliga a preguntarnos: ¿qué democracia? ¿Democracia de quién y para la participación y beneficio de quiénes? No hace falta repetir que apoyamos y defendemos los procesos democratizadores que han venido dándose y los logros que han conquistado. Pero el mejor modo de hacerlo es señalar también las preocupantes y frustráneas distorsiones y limitaciones que les son impuestas para encajonarlos en determinados fines —los de la reproducción de un sistema insatisfactorio y colonial—, que corresponden al proyecto de democracia “viable”, a medias, que conviene a los intereses de la potencia dominante y las oligarquías locales.

Algunos todavía recordarán que en el pasado reciente la política económica y la política de desarrollo —tan esenciales para la soberanía— eran decididas en los órganos del gobierno y en el parlamento, electos por sufragio nacional. Hoy se negocian en el exterior y son apenas

administradas, que no gobernadas, por los organismos democráticamente electos. Pero nosotros queremos órganos de gobierno efectivos, con plenitud de sus facultades soberanas, legítimamente electos, sin injerencia extranjera y sujetos a la consulta, participación y escrutinio de los sectores fundamentales de la sociedad nacional, para hacer realidad las transformaciones liberadoras que urgen. Ello ahora nos obliga a todos a repensar estructuras y mecanismos de elección, de participación y de control populares, que necesariamente deben incluir dispositivos de revocación y recambio de los mandatos otorgados por el voto.

Hasta ahora el sujeto protagónico de nuestra democratización no es el pueblo. Si hay un plan hegemónico o receta de democracia que otros quieren imponernos, es nuestro deber generar y generalizar un plan del pueblo que tenga como fin una democratización participativa y transformadora que interese y convenga a las necesidades y aspiraciones de los sectores verdaderamente nacionales; una democratización pluralista e integral de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales, que hoy permanecen congeladas; un proceso democratizador que se viva como proceso continuo y liberador, en vez de repetición administrativa que nos mantiene en un punto fijo; en una palabra, una democratización antioligárquica, antimperialista y renovadora de la sociedad, que permita dar curso libre a la autodeterminación de nuestros pueblos y de sus fuerzas productivas.

Ello sólo será posible si el amplio frente social de lucha por la continuidad de la democratización es simultáneamente de lucha por la plena recuperación de la independencia política, soberanía y autodeterminación nacionales, y por la solidaridad latinoamericana.